



**JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

JUEZ: MARTHA HELENA QUINTERO QUINTERO

Referencia: **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Nº 11001-33-35-015-2022-00336-00**

Demandante: **ANA MARLEN ZAMBRANO DE VILLALBA**

Demandado: **NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

Procede el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá a decidir el medio del control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter laboral promovido por la señora **ANA MARLEN ZAMBRANO DE VILLALBA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.680.869, contra la **NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, controversia que se resuelve en esta sentencia.

Señala en esta demanda las siguientes,

PRETENSIONES

"PRIMERA: Que se INAPLIQUE por ser contraria a la Constitución Política de Colombia la frase "...y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud" del artículo Primero contenido en el Decreto 0382 del 6 de marzo de 2013, igualmente inaplicar las expresiones, "...y constituye únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud", de los Decretos Nros. 022 del 9 de enero de 2014, 1270 del 9 de junio de 2015, 247 del 12 de febrero de 2016, 1015 del 9 de junio de 2017, 341 del 18 de febrero de 2018.

*SEGUNDA: Que en consecuencia se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el **Oficio No. 20223100009881** del 24 de marzo de 2022 suscrito por el doctor JOSE IGNACIO ANGULO MURILLO, Profesional con funciones del Departamento de Administración de Personal (A) de la ciudad de Bogotá de la Fiscalía General de la Nación, notificado a mi mandante el día 06 de abril de 2022, por medio del cual niega las pretensiones de la reclamación administrativa.*

*TERCERA: Que en consecuencia se declare la nulidad de la **Resolución No. 2-0521** del 10 de mayo de 2022 suscrita por el doctor WILLIAM VILLAREAL COLLAZOS, Subdirector de Talento Humano (E) de la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra el oficio citado en el numeral anterior, confirmando en cada una de sus partes la decisión primigenia, acto administrativo que fue notificado personalmente al suscrito el día 12 de mayo de 2022*

CUARTA: Como consecuencia de la declaración de nulidad de los anteriores actos administrativos y a título de restablecimiento del derecho, ordénese a la Fiscalía General de la Nación, reconocer que la bonificación judicial que percibe mi mandante es constitutiva de factor salarial para liquidar todas las prestaciones sociales devengadas y las que se causen a futuro, y en consecuencia, pague a mi

mandante el producto de la reliquidación de todas sus prestaciones sociales debidamente indexadas, a partir del 1 de enero de 2013 hasta que se haga efectivo el reconocimiento y pago.

QUINTA: - Para el cumplimiento de la sentencia, se ordenará dar aplicación a los artículos 187, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

SEXTA: Sean pagadas las costas y agencias en derecho que resultaren del proceso, de conformidad al artículo 188 del C.P.A.C.A. (Ley 1437 de 2011). (...)"

FUNDAMENTOS FÁCTICOS

Se enuncian como hechos principales de la demanda los que se resumen a continuación:

1. Mediante el Decreto 0382 de 2013, el Gobierno Nacional creó a partir del 01 de enero de 2013 una bonificación judicial a favor de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, la cual tiene un reconocimiento mensual y constituye factor salarial únicamente para el cálculo de la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud.
2. En razón de lo anterior, la demandante presentó el 25 de febrero de 2022, ante la Fiscalía General de la Nación la solicitud para que se reliquidara la totalidad de sus prestaciones sociales tomando como base para el cálculo la bonificación judicial mencionada anteriormente. Sin embargo, la entidad demandada negó la petición mediante Oficio- radicado 20223100009881 del 24 de marzo de 2022.
3. Finalmente, la actuación administrativa fue agotada mediante la interposición del recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la resolución 2-0521 del 10 de mayo de 2022, por medio del cual, se confirma la negativa a la solicitud elevada por la demandante.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LAS PRETENSIONES

Constitucionales: Artículos 1, 2,4,5,6,9,13,25,29,53,55,83,93,209 y 228 de la Constitución Política.

Legales: Ley 4ª de 1992, Ley 16 de 1972, Ley 54 de 1964, Ley 21 de 1982, Ley 50 de 1990, Ley 319 de 1996, Ley 270 de 1996, Ley 411 de 1997, Ley 1469 de 2011 y Código Sustantivo del Trabajo

Reglamentarias: Decretos 1042 de 1978, 1092 de 2012, 53 de 1993, 875 de 2012,022 de 2014,1270 de 2015 y 247 de 2016.

Acuerdo del 06 de noviembre de 2012.

Internacionales: Convención Americana de Derechos Humanos (Ley 161 de 1972). Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador". (Ley 319

de 1962). Convenios 95,100 y 111 y 151 de la OIT, sobre la protección de Salario 1949, igualdad de remuneración 1951 y discriminación en materia de empleo 1958.

CONCEPTO DE VIOLACIÓN

El apoderado de la parte actora señaló que los actos administrativos demandados infringieron las disposiciones citadas y se debería declarar su nulidad por las causales de falsa motivación y desviación de poder, bajo el entendido que el reconocimiento limitado del carácter salarial de la bonificación judicial únicamente para efectos de cálculo y deducción de los valores correspondientes a salud y pensiones, contraviene los fines del ordenamiento jurídico y constituye una vulneración de las normas laborales, las disposiciones internacionales y de los principios constitucionales de igualdad, equidad, favorabilidad y progresividad.

En este sentido, la asignación salarial establecida por la entidad bajo estos términos implica un trato desigual en la medida que el salario se constituye por todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución de sus servicios. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la bonificación se trata de una contraprestación directa del servicio y no de un beneficio adicional, debería incluirse totalmente dentro de la base para la liquidación prestacional de los trabajadores.

Así las cosas, el apoderado concluye que la administración mediante la emisión de sus actos administrativos se abstuvo de actuar conforme a los fines legales, generando un efecto abiertamente contrario al mejoramiento del servicio e indiscutiblemente arbitrario e ilegítimo, toda vez que la interpretación de las normas aplicables al caso en concreto fue acomodada a los intereses de la entidad y no del trabajador quien resulta ser la parte más débil en este conflicto.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Mediante auto de fecha 7 de septiembre de 2022 se corrió traslado a la entidad demandada para que formulara su contestación de la demanda, de conformidad con lo previsto en los artículos 197,198 y 199 de la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021.

Vencido el término otorgado, la Fiscalía General de la Nación optando por guardar silencio, se abstuvo de emitir su contestación.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto de febrero de 2023 se corrió traslado a las partes y al representante del Ministerio Público por el término de 10 días, para que formularan sus alegatos de conclusión y rindiera concepto de fondo, respectivamente, de conformidad con lo previsto en el Artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021.

Parte actora: A través de correo electrónico del 13 de marzo de 2023 presentó alegatos de conclusión haciendo alusión a la normatividad y a los criterios jurisprudenciales que a su juicio imponen una prohibición al Gobierno y a la Entidad demandada de desmejorar los salarios y las prestaciones sociales de los servidores públicos. Con base en lo anterior, sostiene que la modulación en el reconocimiento del carácter salarial de la bonificación judicial vulnera la definición de salario y el orden superior que protege el trabajo, los derechos y prestaciones sociales de los servidores públicos, así como el carácter irrenunciable que los mismos ostentan.

Vencido el término mencionado, la parte demandante, el Ministerio Público y la Nación- Fiscalía General se abstuvieron de emitir concepto alguno.

CONSIDERACIONES

De la revisión de las piezas procesales, se observa que se surtieron en su totalidad las etapas del proceso ordinario sin que se presenten causales de nulidad de lo actuado, siendo ostensible en estas circunstancias proceder a proferir la decisión que merezca la Litis.

1. La controversia:

En el presente proceso se debate la legalidad de los actos administrativos: i) Oficio con radicado No. 20223100009881 del 24 de marzo de 2022, notificado el 6 de abril de 2022, suscrito por el profesional con funciones del departamento administración de personal (A) de la Fiscalía General de la Nación, y ii) el acto administrativo resolución 2-0521 del 10 de mayo de 2022, notificado el 12 de mayo de 2022 y suscrito por el Subdirector de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, mediante los cuales se negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a que tiene derecho la demandante y que son liquidadas con fundamento en el salario básico con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial.

2. Problema Jurídico:

Se circunscribe a determinar si la demandante, tiene derecho a que por esta instancia judicial y a través del control concreto de constitucionalidad, se inaplique parcialmente el Decreto 382 de 2013, específicamente la parte que señala que la bonificación "constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud" y demás normas que lo modifican; y en consecuencia, se ordene la reliquidación de todas las primas legales y extralegales devengadas, prima de servicio, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses a la cesantías y demás causadas a partir del 1 de enero de 2013, teniendo en cuenta la bonificación judicial creada por el mencionado Decreto.

3. Marco Jurídico de la Bonificación Judicial de la Fiscalía:

La Carta Política de 1991, en su artículo 150, numeral 19, literal e) y en los artículos 20 y 50 transitorios, preceptúa:

"Art. 150. Corresponde al Congreso hacer las Leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos:

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública.

Art. 20. El gobierno nacional, durante el término de dieciocho meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución y teniendo en cuenta la evaluación y recomendaciones de una comisión conformada por tres expertos en la administración pública o derecho administrativo designados por el Consejo de Estado; tres miembros designados por el gobierno nacional y uno en representación de la Federación Colombiana de Municipios, suprimirá, fusionará o reestructurará las entidades de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta del orden nacional, con el fin de ponerlas en consonancia con los mandatos de la presente reforma constitucional y, en especial, con la redistribución de competencias y recursos que ella establece.

Art. 52. A partir de la entrada en vigencia de esta constitución, la Comisión Nacional de Valores tendrá el carácter de Superintendencia. El Gobierno Nacional dispondrá lo necesario para la adecuación de dicha institución a su nueva naturaleza, sin perjuicio de lo que al respecto podrá disponer el gobierno en desarrollo de lo establecido en el artículo 20 transitorio."

Conforme la disposición en cita se tiene que, para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, existe una competencia compartida entre el Legislador y el Ejecutivo.

Ahora bien, en cumplimiento de ese mandato constitucional en el año 1992 el Congreso de la República, expidió la Ley 4 *"Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos (...)"*, dicha disposición facultó al Presidente de la República a efectos que regulará el régimen laboral de los servidores públicos, incluidos los servidores de la recién creada Fiscalía General de la Nación.

En desarrollo de las facultades conferidas por la Ley 4 de 1992, el Presidente expidió el Decreto 053 de 1993 *"Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones"*, a través del cual se fijó el régimen salarial de los servidores públicos vinculados a la entidad con posterioridad a la vigencia de dicha norma y extensivos a quienes se acogieren y vinieran con el régimen contenido en el Decreto 2699 de 1991.

En el año 2013, el Gobierno expidió el Decreto 382 de 6 de marzo de 2013 *"Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones"*, en el artículo 1¹ de dicho cuerpo

¹ ARTÍCULO 1o. Créase para los servidores de la Fiscalía General de la Nación a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto número 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el Decreto número 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1o de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año, al valor que se fija en la siguiente tabla:

normativo se reconoció a partir del 1 de enero de 2013, una bonificación mensual para todos los servidores de la entidad, cuyos valores a reconocer fueron discriminados año por año hasta el 2018, debiéndose reajustar anualmente a partir del 2014 hasta el 2018, el valor que resultare de diferencia entre el 2% del IPC ya ajustado y el que efectivamente se causara de acuerdo a las certificaciones expedidas por el DANE. Constituyendo únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Así mismo, se precisó en el mentado Decreto que a partir del año 2019 y siguientes, el valor de la bonificación sería el de la bonificación equivalente a la recibida en el año anterior, ajustado con el IPC y con respecto a los funcionarios y empleados que no optaron por el régimen del Decreto 53 de 1993, en el artículo 2 del Decreto 382 de 2013, se estableció que percibirían a título de bonificación judicial la diferencia en caso de percibir un ingreso total anual inferior respecto de quien ejerce el mismo empleo, mientras permanecieran vinculados al servicio.

4. Caso Concreto:

En el presente asunto, la demandante pretende que se le reconozca la bonificación judicial creada mediante Decreto 382 de 2013, como factor salarial a efecto que le sean reliquidadas sus prestaciones sociales devengadas desde el 01 de enero 2013 en adelante.

Frente al asunto planteado, debe precisarse *prima-facie* que el concepto salario, está constituido por todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio, ya sean percibidas en dinero o especie². Aspecto que fue desarrollado por el H. Consejo de Estado³ en reciente sentencia del 06 de abril de 2022, en la que señaló que existe una sólida línea jurisprudencial proferida por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la cual desarrolla el carácter salarial de la mencionada Bonificación Judicial, al analizar el concepto de salario, la

PARÁGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia, no le aplica el incremento que fije el Gobierno Nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes.

A partir del año 2014 y hasta el año 2018, los valores señalados en las tablas del presente artículo contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno Nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que se presente.

Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

² Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda- Subsección B. Sentencia del 28 de septiembre de 2016. MP: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

³ Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda. Radicado No. 76001233300020180041401 (0470-2020). Fecha: 06 de abril de 2022. Conjuez Ponente Dr. Carmen Anaya de Castellanos.

noción de factor salarial y los criterios que permiten concluir que esta prestación reúne todos los requisitos del salario, ya que sin perjuicio de la denominación que se le atribuya, todo pago habitual que reciba el trabajador en contraprestación de su servicio personal constituye salario, incluidas las bonificaciones habituales.

En virtud lo anterior, concluyó la Alta Corporación lo siguiente:

"En este orden de ideas, para la Sala es claro que la bonificación judicial creada mediante Decreto No. 0382 de 2013, al ser un pago que reciben los empleados y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, de forma habitual y periódica en contraprestación a sus servicios, no habría motivo alguno para desconocer su carácter salarial, máxime si se tiene en cuenta que fue creada precisamente para materializar una nivelación salarial dispuesta en una Ley marco. Aceptar lo contrario, implicaría desconocer abiertamente los límites a la facultad otorgada por el Congreso al Gobierno Nacional y desatentar principios de rango constitucional como la progresividad, la primacía de la realidad sobre las formas y los límites protectores señalados por el Constituyente en el artículo 53 de la Carta Política".

De la citada providencia, se colige que la tesis acogida por el órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dispone que constituye salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución directa por la prestación de sus servicios, independientemente la denominación que se le dé.

Lo anterior, implica que al ser la bonificación judicial una suma que periódicamente perciben los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación como consecuencia de la retribución directa del servicio que prestan en la institución, esta constituye salario, y, por lo tanto, tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva hacia futuro, esto es, desde el año 2013 en adelante.

En ese contexto se tiene que el Decreto que dispuso que la Bonificación Judicial percibida por los servidores de la Fiscalía General de la Nación, no constituía salario, desconoce el principio de progresividad plasmado en el artículo 53 de la Carta Política, toda vez que las llamadas primas y bonificaciones representan un incremento remuneratorio del salario vigente de los servidores públicos, y la decisión de excluirle su carácter salarial desconoce los principios constitucionales que protegen al trabajador. Conforme lo indicado, es dable concluir que la Bonificación por servicios prestados debe ser reconocida a los Servidores Públicos como factor salarial para efecto de liquidar las prestaciones sociales causadas, a partir del 1 de enero de 2013.

Ahora bien, en el presente caso, se tiene acreditado que la señora ANA MARLEN ZAMBRANO DE VILLALBA ingresó a laborar en la Fiscalía General de la Nación desde el 08 de octubre de 1991, desempeñándose a la fecha de presentación de la demanda como Técnico Investigador IV, devengando los siguientes emolumentos mensualmente: sueldo básico y bonificación judicial (Fl. 19 del Archivo 3).

Igualmente, se tiene que, el régimen salarial aplicable a la servidora demandante es el contenido en el Decreto 053 de 1993 y no se le liquidaron sus prestaciones teniendo en cuenta la bonificación judicial, sustentado en los Decretos 382 de 2013, 022 de 2014, 1270 de 2015, 247 de 2016, 1015 de 2017 , 341 de 2018 y demás complementarios, lo cual a todas luces desconoce los postulados superiores citados en precedencia, pues se reitera se trata de una remuneración mensual que percibe el trabajador como contraprestación a su servicio, y por lo tanto, debe reconocerse como

parte del salario a efecto que le sea tenido en cuenta al momento de liquidarse los demás emolumentos que perciba.

Conforme lo antes expuesto, lo procedente en el *sub-lite*, es decretar la nulidad de los actos acusados, y, en consecuencia, ordenar a la Fiscalía General de la Nación que reliquide las prestaciones sociales que sean liquidadas con fundamento en el salario básico devengadas por la señora ANA MARLEN ZAMBRANO DE VILLALBA, teniendo en cuenta para el efecto además del salario básico la bonificación judicial creada mediante Decreto 382 de 2013, la cual percibe desde el 01 de enero de 2013.

En consideración a lo anterior, habrá lugar a inaplicar el Decreto 382 de 2013, modificado por los Decretos 022 de 2014 1270 de 2015, 247 de 2016, 1015 de 2017, 341 de 2018 y demás complementarios, única y exclusivamente en lo que se refiere a que no dispusieron el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, pues desconocen lo que la jurisprudencia ha definido como salario.

En este orden de ideas, se tiene que la Fiscalía General de la Nación deberá proceder a reliquidar las prestaciones sociales devengadas por la demandante, que sean liquidadas con fundamento en el salario básico, incluyendo para el efecto la Bonificación Judicial, ya que esta debe considerarse como parte del salario, razón por la cual resulta evidente que los actos acusados están viciados de nulidad y las pretensiones de la demanda tienen vocación de prosperar.

5. Restablecimiento del Derecho:

La reliquidación de cesantías y demás prestaciones sociales. Se ordenará a la Fiscalía General de la Nación que proceda a reliquidar las cesantías y demás prestaciones sociales devengadas por la demandante y que sean liquidadas con fundamento en el salario básico, desde el 01 de enero de 2013 y mientras se causen, teniendo en cuenta además del salario básico la Bonificación Judicial creada por el Decreto 382 de 2013 según el cargo desempeñado, descontando los aportes del sistema de seguridad social, sino se hubieren hecho, en la proporción que corresponda a la accionante.

Prescripción Trienal. Se encuentra demostrado que la accionante elevó petición mediante radicado No. 20226110056072 del 25 de febrero de 2022 (Fl. 8 al 10 archivo 3), razón por la cual infiere este Despacho que el fenómeno de la prescripción trienal de que trata el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, tuvo ocurrencia sobre los reajustes salariales ocasionados con anterioridad al 25 de febrero de 2019.

El ajuste al valor. Las sumas a reconocer y pagar serán actualizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 187 la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta para ello las fechas de causación y de pago efectivo de las mismas.

En consecuencia, se deberá aplicar la fórmula establecida por la Sección Tercera del H. Consejo de Estado aplicada por la Sección segunda de la alta corporación a saber:

$$R = Rh \times \frac{\text{Índice final}}{\text{Índice inicial}}$$

En donde el valor (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por la parte actora desde la fecha a partir de la cual se originó la obligación, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE vigente a la fecha de la ejecutoria de la sentencia por el índice inicial vigente a la fecha en que debía hacerse el pago.

Los intereses. Se pagarán intereses en cuanto se den los supuestos de hecho previstos en el Art. 192 de la Ley 1437 de 2011.

Respecto de las **COSTAS**, considerando que la entidad demandada no observó una conducta dilatoria o de mala fe dentro de la actuación surtida dentro de este proceso, no procede la condena en costas. Esta evaluación se realiza con fundamento en lo ordenado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá- Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. - INAPLICAR por inconstitucional, la palabra “únicamente” contenida en el párrafo final del artículo 1 del Decreto 382 de 2013, para los efectos inter partes del proceso promovido por la señora **ANA MARLEN ZAMBRANO DE VILLALBA** identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.680.869, contra la **NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, a fin de considerar que la bonificación judicial sí constituye factor salarial para la base de liquidación de todas las prestaciones sociales y cotizaciones de aportes al Sistema General de Pensiones y Sistema General de Seguridad Social en Salud, a que tiene derecho la demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de la decisión.

SEGUNDO. - DECLARAR LA NULIDAD de los actos administrativos: i) Oficio con radicado No. 20223100009881 del 24 de marzo de 2022, notificado el 6 de abril de 2022, suscrito por el profesional con funciones del departamento de personal (A) de la Fiscalía General de la Nación, y ii) el acto administrativo resolución 2-0521 del 10 de mayo de 2022, notificado el 12 de mayo de 2022, suscrito por el Subdirector de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación, mediante los cuales se negó la reliquidación de las prestaciones sociales a que tiene derecho la demandante con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. - Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad, a título de restablecimiento de derecho, **CONDENAR** a la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, a reliquidar las cesantías y demás prestaciones sociales que sean liquidadas con fundamento en el salario básico, devengadas por la señora ANA MARLEN ZAMBRANO DE VILLALBA identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.680.869, desde el 01 de enero de 2013 y mientras se causen, teniendo en cuenta además del salario básico la bonificación judicial, descontando los aportes al sistema de seguridad social, que no se hubieren hecho, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la decisión.

CUARTO. - El valor que resulte adeudado a la parte actora, deberá ser reajustado en los términos previstos en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO. -DECLARAR prescritos los reajustes salariales ocasionados con anterioridad al 25 de febrero de 2019, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEXTO. - A la sentencia se le dará cumplimiento dentro del término señalado en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, y los valores que resultaren a deberse deberán actualizarse en la forma dispuesta en el artículo 187 del mismo estatuto y en los términos señalados en la parte motiva.

SÉPTIMO. - No hay lugar a condenar en costas.

OCTAVO. - Ejecutoriada la presente providencia expídanse copias a las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Código General del Proceso.

NOVENO. - La presente providencia se notifica a las partes de conformidad con el artículo 203 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 243 y 247 ibídem.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTHA HELENA QUINTERO QUINTERO

JUEZ

VBT

Firmado Por:
Martha Helena Quintero Quintero
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
015
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c21f9c2eafc3d9ad5a1b1f5a23097a48bd2447241a79809b534fff6bbf76f196**

Documento generado en 28/04/2023 03:35:56 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>